

REPÚBLICA DE COLOMBIA**RAMA JUDICIAL****TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN****SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por LUCÍA DEL CARMEN LÓPEZ CARMONA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-017-2019-00532-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, al abogado DARIO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO, con tarjeta profesional No. 271.442 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante, previa declaración de que es beneficiaria del régimen de transición pensional, se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de vejez desde el momento en que cumplió los requisitos establecidos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990; a reliquidar la pensión anterior conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 90%; intereses moratorios del artículo 141 de la anterior ley o, en subsidio, la indexación; y las costas del proceso (fls. 2 a 3).

Como sustento de sus pretensiones, manifiesta en síntesis lo siguiente: Por el número de semanas cotizadas es beneficiaria del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; nació el 25 de agosto de 1959, por lo que cumplió los 55 años de edad el mismo día y mes de 2014; presentó a la demandada solicitud de pensión de vejez el 29 de agosto de 2016, y la misma le fue reconocida bajo los parámetros del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; para liquidar esta prestación se tuvo en cuenta 1742 semanas, una tasa de reemplazo del 76.99%, un monto inicial equivalente al SMLMV y el 25 de agosto de 2016 como fecha de inicio de pago; no le fue reconocido retroactivo pensional, no obstante haber dejado de cotizar desde el 30 de diciembre de 2014; se le adeuda lo que reclama; y finaliza diciendo que el 6 de junio de 2018, presentó derecho de petición reclamando lo que aquí se solicita, por lo que cumplió con el requisito de la reclamación administrativa (fls. 1 a 2).

La demandada dio respuesta oportuna al libelo, oponiéndose a la prosperidad de todas las pretensiones. Frente a los hechos, dijo que eran ciertos los de la edad de la accionante, la afiliación a la entidad y los relativos a las resoluciones emitidas; de los demás que no le constaban o que no eran ciertos. Formuló como excepciones las que denominó inexistencia del retroactivo, inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez, inexistencia de la obligación de reconocer intereses por mora, compensación indexada, prescripción, imposibilidad de condena en costas y descuento por retroactivo por salud (fls. 51 a 56).

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 7 de junio de 2019, condenó a la entidad demandada a pagar la suma de \$10.448.131 por concepto de retroactivo pensional por el período comprendido entre el 6 de junio de 2015 y el 25 de agosto de 2016; autorizó descontar de esta cantidad, lo correspondiente a aportes por salud; intereses moratorios a partir del 30 de diciembre de 2016 y hasta que se verifique el pago; absolvió de las demás pretensiones; declaró no probadas las excepciones propuestas, salvo la de prescripción, que la reconoció de manera parcial; y le impuso las costas de la instancia a la entidad, fijando como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 (fl. 74v. y audio digital).

La Sala conoce del asunto en el grado de consulta.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a la manera como se conoce del asunto, el punto básico a revisar en esta instancia, se circunscribe al retroactivo pensional reconocido, y en caso de que este se confirme, se abordará lo dispuesto en materia de intereses moratorios y excepciones propuestas por la entidad demandada.

No es tema de discusión en el proceso que la señora Lucía del Carmen López Carmona nació el 25 de agosto de 1959 (fl. 11), cumpliendo los 55 años el mismo día y mes del año 2014; que cotizó para el Sistema General de Pensiones administrado por Colpensiones desde el 18 de octubre de 1977 y hasta el 31 de diciembre de 2014 (fl. 27); que mediante resolución GNR302430 del 13 de octubre de 2016 se le reconoció la pensión de vejez a partir del 25 de agosto de 2016, en un monto equivalente al SMLMV; y por último, que mediante escrito presentado el 6 de junio de 2018 reclamó a la entidad demandada tanto el retroactivo pensional, como los intereses moratorios y la reliquidación de la pensión (fls. 34 a 36).

Ahora bien, atendiendo a lo que es motivo de revisión en esta instancia, lo primero que debe abordarse es lo dispuesto en materia de transición pensional, pues la *a quo* consideró que la demandante era beneficiaria de ella, en tanto para el 1 de abril de 1994 tenía más de 750 semanas, y cumplió los 55 años de edad antes de que finalizara el aludido beneficio conforme lo reguló el acto legislativo 01 de 2005, es decir, antes del 31 de diciembre de 2014.

Este planteamiento resulta inobjetable, en especial en lo que respecta al número de semanas, pues de la historia laboral obrante a folios 26 se advierten 726.44 semanas, y si a este número se le suman las semanas en mora con el empleador Hernández Vélez y Cía. Ltda., y que se deducen del documento obrante a folios 21, se concluye que las semanas a considerar a 1 de abril de 1994 superan las 773. En cuanto a estas semanas en mora, frente a las cuales

no queda duda que la relación laboral estaba vigente, pues el retiro se produjo en el mes de octubre de 1987 (fl. 21) y las contabilizadas solo llegaron con este empleador hasta el 30 de noviembre de 1986 (fl. 16), sea del caso rememorar lo dicho por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de noviembre de 2020 (SL5172-2020):

“Y en todo caso, debe señalarse que si la única justificación para no validar los periodos en comento era la existencia de deuda en su pago, tal razón en todo caso no es válida, pues de manera reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que si la administradora de pensiones no adelanta las acciones pertinentes para obtener el recaudo de los aportes en mora, es a ella a quien corresponde asumir el pago de la pensión (CSJ SL6030-2017, CSJ SL3399-2018, CSJ SL3550-2018 y CSJ SL2074-2020). Precisamente, en la tercera providencia, la Sala expresó:

Así las cosas, vale indicar que esta Corporación en providencia CSJ SL, 10 feb. 2009, rad. 34256 reiterada, entre otras, en CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 40852, CSJ SL782-2013, CSJ SL5987-2014, CSJ SL4818-2015 y CSJ SL 12718-2016, sostuvo: “en el caso del trabajador dependiente afiliado al Sistema, en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se causan cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente de que se presente mora patronal en el pago de las mismas (...).

Con todo, sea esta la oportunidad para reiterar dos temas que han sido profusamente desarrollados por la jurisprudencia del trabajo. Uno, es que el estado de mora no genera la pérdida de la calidad de cotizante activo del trabajador, en la medida que el retardo en el pago de las cotizaciones constituye una conducta que no puede atribuírsele, ni menos puede generar los efectos de una desafiliación (CSJ SL667-2013); y dos, en los eventos de mora del empleador, las administradores de pensiones deben adelantar las gestiones de cobro, a fin de obtener el debido recaudo de las cotizaciones, de modo que, de omitirse esta obligación, responderán por el pago de la prestación, lo que indica que si estas se realizan aun de forma extemporánea, deben tenerse en cuenta para el pago de la prestación deprecada.

Con base en lo antes dicho, y partiendo del hecho que la demandante cotizó sólo hasta el mes de diciembre de 2014, presentando la correspondiente novedad de retiro (fl. 20), se tiene que la pensión se debió cancelar, acorde con lo establecido en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, a partir

del 1 de enero de 2015, pero como solo se hizo la reclamación el 6 de junio de 2018, las mesadas anteriores a este mismo día y mes de 2015, se encuentran prescritas (art. 151 del CPTSS), y como así lo dispuso la falladora de primer grado, ningún cambio cabe realizar.

Mucho menos se alterará la cuantía deducida, pues partió del salario mínimo legal mensual vigente, monto mínimo de una pensión en el país (Art. 35 de la Ley 100 de 1993), y los cálculos se realizaron sobre los extremos correctos: 6 de junio de 2015, que fue el que se acabó de señalar, y el 25 de agosto de 2016, pues la pensión de vejez se le comenzó a cancelar a partir de esta fecha (fl. 14).

Lo dispuesto en materia de intereses moratorios (art. 141 de la Ley 100 de 1993) estima la Sala que debe modificarse, ya que si la reclamación puntual sobre retroactivo pensional e intereses moratorios solo se hizo el 6 de junio de 2018 (véase fl. 34), la entidad tenía 4 meses para resolver la petición, y como así no lo hizo, debe decirse que éstos solo se podían reconocer a partir del 6 de octubre de 2018 y hasta el momento en que se verifique el pago. Sobre este tema, agréguese que en el expediente no obra prueba de la cual pueda derivarse buena fe o justificación para que la entidad opositora no hubiese hecho el reconocimiento pensional aquí reconocido.

En conclusión, y salvo la modificación anterior, el fallo de primer grado se habrá de confirmar en su integridad, incluido lo relativo a costas, dado que la decisión fue desfavorable a Colpensiones (art. 365-1 del CGP).

Sin costas en esta instancia, dada la manera como se conoce del asunto.

DECISIÓN:


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de consulta, de fecha y

procedencia conocidas, incluido lo relativo a las costas, salvo la fecha señalada para que los intereses moratorios comiencen a liquidarse, la cual se modifica, para quedar ésta en el 6 de octubre de 2018, tal como quedó anotado en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO, en aplicación del numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, durante la vigencia del Decreto Legislativo 806 del 2020, según lo dispuso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia AL2550-2021

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR